

MUJER E INMIGRACIÓN

Begoña Sánchez
SOS RACISME Catalunya

1. Introducción

Actualmente el 50% de la población de Catalunya son mujeres. A nivel de la población inmigrada las mujeres ya representan un 40% del total y en algunos colectivos como en la población latinoamericana llegan a ser el 56%. Esta realidad hace necesario abordar la situación de la mujer inmigrada desde una perspectiva de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género. Así, la mujer inmigrada sufre una doble discriminación: aquella originada por ser mujer y aquella referida a su origen inmigrante.

En cuanto a la discriminación por género, no cabe duda que aunque en los últimos años se ha avanzado considerablemente, es una realidad que todavía no existe una real y efectiva igualdad de oportunidades. Vivimos en una sociedad donde el índice de paro femenino es mucho más elevado y los sueldos para una misma categoría profesional siguen sin equipararse; una sociedad donde queda mucho por hacer para conseguir un reparto proporcional de las tareas domésticas y donde la violencia de género continua siendo un problema social importante. Las mujeres inmigrantes como el resto de mujeres sufren estas situaciones.

A esta realidad se le han de sumar todas aquellas dificultades originadas por el hecho de ser inmigrante y que le influyen desde tres perspectivas provocadas por las políticas y legislaciones que fomentan la imagen de sujeto pasivo, cuando no la imagen negativa en el imaginario colectivo. En primer lugar tenemos que citar la desigualdad de derechos provocada por la legislación de extranjería: este marco legal consolida ciudadanos de segunda categoría fomentando la exclusión social, la explotación laboral y el racismo. En segundo lugar la invisibilidad de la inmigración femenina: el planteamiento de la política de extranjería ha provocado que este colectivo tenga más dificultades de integración en la sociedad de acogida ya que la legislación relega a la mujer a un plano secundario dentro del proceso migratorio provocando que repita aquellos roles que la mujer autóctona está abandonando. Y por último y como consecuencia de los dos puntos anteriores, el escaso reconocimiento social. Ésto último se manifiesta en la falta de presencia visible en la vida pública, en la desigualdad de oportunidades y en la existencia de tópicos y prejuicios negativos hacia el colectivo que van más allá de los ya existentes y generales que alimentan el racismo social hacia los inmigrantes extracomunitarios.

2. Invisibilidad y homogeneización de la inmigración femenina

La feminización de la inmigración es un hecho constatado: hay países emisores de inmigración donde la mayoría de los ciudadanos que emigran son mujeres, en otros casos la población femenina emigra a partir de las reagrupaciones familiares. Incluso en un hecho tan grave como la inmigración de menores no acompañados podemos constatar cada vez más niñas.

Todo flujo migratorio tiene unas consecuencias en el país emisor, así como en el de acogida. El papel de la mujer en estos aspectos es importante y fundamental. Así podemos recordar que en aquellos países donde la emigración es predominantemente masculina, las mujeres han debido organizarse para ocuparse de la familia y cubrir el trabajo que hasta entonces hacían los hombres. Así por ejemplo las mujeres empiezan a llevar las tareas del campo, a emigrar interiormente a las ciudades (caso de muchos pueblos del África subsahariana). Cuando son ellas las que emigran, muchas veces dejan en el país de origen a sus hijos a cargo de familiares e intentan llevar a distancia el rol de la maternidad a la vez que el mantenimiento económico de la unidad familiar y se convierten en una fuente de ingresos para el país emisor (casos de muchas mujeres latinoamericanas).

Igual que no podemos hablar de la inmigración en general como un bloque homogéneo, tampoco podemos hacerlo de la mujer inmigrante. Por tanto se trata de una realidad heterogénea, de un colectivo que agrupa realidades diferentes no solo en cuanto a procesos migratorios sino en cuanto a aspiraciones, motivaciones etc. Es lógico, estamos hablando de personas que tienen en común ser mujeres e inmigrantes pero que su dimensión humana va más allá de estos ítems. Hay mujeres recién llegadas, otras asentadas hace años en la sociedad de acogida y otras que crecen en nuestra sociedad y son ya catalanas de derecho. También podemos hablar de diferentes causas para emigrar y diferentes formas de hacerlo. Aunque la mayoría lo hace por causas económicas, hay también quien lo hace por motivos personales, búsqueda de nuevas formas de vida y asilo. Las hay que emigran por cuenta propia y otras que lo hacen por reagrupación familiar. Y como en todo proceso migratorio influyen las características del país de origen: tipo de población que emigra rural o urbana, creación de redes de ayuda o de parentesco que apoyan el proceso. Y las características de la sociedad de acogida: legislación, políticas de integración que provocarán en muchos casos que las prioridades personales adquieran un orden u otro. Por lo tanto usando correctamente el lenguaje y respondiendo a la realidad existente deberíamos hablar de mujeres inmigradas, en plural porque son diversas y de inmigradas y no de inmigrantes puesto que ya han finalizado su proceso migratorio y se encuentran ya en nuestra sociedad.

3. Racismo institucional: discriminaciones por el marco legal

La política migratoria y la de asilo no han contemplado un análisis desde la perspectiva de género a la hora de configurar el marco legal. Así, el derecho de asilo no contempla como causa la persecución por cuestión de género. Centrándonos en analizar el marco legal de la inmigración en el Estado español, más allá de que la

existencia de una ley de extranjería es de por sí discriminatoria dado que limita y vulnera derechos exclusivamente por cuestión de origen, podemos constatar desde los inicios un planteamiento totalmente enfocado a una inmigración temporal y preferentemente masculina.

En 1985 cuando se elaboró la primera ley de extranjería se planteó un perfil de inmigración que resaltaba que los inmigrantes eran hombres jóvenes que al cabo de un período de tiempo volverían a su país de origen. Ésto llevó a no plantearse que quizás la gente al final se quedaba aquí, formaría familias etc. y por tanto hubo una total falta de planteamiento de políticas de integración, de una previsión en el aumento de los presupuestos sociales, una falta de planteamiento real y efectivo de las reagrupaciones familiares etc. A la mujer desde entonces se la contempló como simple acompañante del proceso migratorio de su marido y se generalizó que si emigraba lo haría por reagrupación familiar.

Desde la primera ley ha corrido mucha tinta y las leyes de extranjería se han modificado endureciéndose más o menos en función de los gobiernos que se han ido sucediendo pero han mantenido siempre su esencia discriminatoria e injusta para las personas inmigrantes. En este contexto la invisibilización de la feminización de la inmigración así como la negación de la mujer inmigrante como sujeto activo en el hecho migratorio han sido evidentes.

Este planteamiento legal y político provoca que las mujeres inmigradas sufran una serie de dificultades añadidas debido al marco legal. Analicemos algunas de ellas:

3.1. Reagrupación familiar

La Ley de Extranjería establece que la mujer reagrupada tendrá un permiso dependiente del marido que autoriza la residencia pero no el trabajo. Esto en la práctica quiere decir que pueda establecerse aquí pero no trabajar. Esto implica que se relega a la mujer inmigrante a practicar unos roles sociales centrados exclusivamente en el cuidado del hogar y la reproducción, cuando en la sociedad actual se ha avanzado en otro sentido. El permiso o autorización de trabajo lo conseguirá a los cinco años o si hay separación al haber demostrado la convivencia de dos años. Cuando obtenga la autorización para trabajar la mujer podrá comenzar a tramitar una autorización independiente. Esta situación de dependencia del marido dificulta la integración en la sociedad de acogida como sujeto activo y con necesidades y proyectos propios, así como la denuncia y resolución de situaciones de violencia doméstica.

Cuando es la mujer la que realiza la reagrupación familiar también existen trabas puesto que los requisitos para tramitarla son en muchos casos difíciles de conseguir. Haber residido un año legalmente, tener autorización para un año más y acreditar un alojamiento adecuado y medios de vida suficientes son muchas veces cuestiones imposibles de conseguir dada la realidad y precariedad del mercado laboral. Muchas mujeres son relegadas a trabajar en el sector de servicio doméstico un sector poco

regularizado, sin contratos muchas veces, con régimen interno etc. que dificultan poder reunir los tres requisitos.

3.2. Campo laboral. Acceso al trabajo

Como ya hemos mencionado la mujer inmigrante es relegada al sector doméstico. Principalmente cubren aquellas roles que la mujer autóctona ha ido abandonando para incorporarse al mundo laboral: cuidado de ancianos, hijos y limpieza del hogar. Muchas mujeres inmigradas trabajan más de lo permitido en una jornada laboral, como internas en la casa del contratador, realizando además de las tareas estipuladas otras que requerirían más remuneración (clases de idiomas, atención sanitaria, etc.) y la mayoría sin contrato y recibiendo un sueldo más bajo que las trabajadoras nacionales del sector doméstico.

Refiriéndonos al contingente (cupos de contrataciones en origen fijados por el gobierno anualmente) se incorpora a la mujer a las tareas agrícolas y servicios. Entre muchos empresarios se tiene la imagen de que la trabajadora es mucho más “integrable y manejable” que el hombre. Esto se ha visto en el cambio del perfil en muchos contingentes de temporeros pasando de ser hombres marroquíes a ser mujeres de esa nacionalidad o de Europa del Este. La realidad es que siguen siendo sujetos susceptibles de la máxima explotación laboral debido en muchos casos a que se trata de madres de familia que no se pueden permitir perder un puesto de trabajo.

3.3. Proceso de normalización

De las 680.000 solicitudes totales una gran parte son del servicio doméstico: exactamente un 31% del total, dato que pone de manifiesto la inestabilidad de los contratos conseguidos, y cómo el proceso no respondía a la realidad. Muchas fueron las personas inmigradas que a pesar de trabajar en empresas no pudieron legalizar su relación laboral porque ello quedó en manos de la voluntad empresarial. El proceso de normalización ha sido un balón de oxígeno momentáneo para resolver la situación de muchas personas inmigradas en situación irregular pero insuficiente puesto que ha dejado igualmente más de 700.000 personas fuera del proceso y al tratarse de una medida momentánea no se han abordado las causas de la irregularidad que son fundamentalmente la misma ley. Hemos de recordar que los permisos otorgados en este proceso son de un año y permiten trabajar exclusivamente en el sector presentado y que son muchos los y las trabajadores inmigrantes que han tenido que aceptar contrataciones muy precarias y en otros casos incluso aceptar contraprestaciones por parte del empresario. Falta por ver cuantas renovaciones se podrán conseguir.

A este proceso de regularización pudieron acogerse un total de 283.000 mujeres en todo el estado español (41% del total de solicitudes) y de estas 181.500 fueron dentro el marco del servicio doméstico. El 83% de las de autorizaciones corresponden a solicitudes femeninas frente al 16% hechas en este sector por los hombres. Por tanto podemos ver como la inserción laboral de la mujer es mucho más complicada y dificultosa en otros sectores profesionales.

Si volvemos la vista a la situación de las trabajadoras inmigrantes podemos constatar que dada la poca regulación del servicio doméstico, la precariedad en el colectivo aumenta. En muchos casos se ha obtenido el contrato pero son ellas mismas las que están pagando por su cuenta la cotización a la seguridad social a partir de salarios mínimos. Mantener el puesto de trabajo para poder renovar la documentación hace que sean víctimas fáciles de explotación laboral.

El apartheid jurídico va más allá de la política de extranjería. No sólo la ley de extranjería es discriminatoria sino que la tendencia en política migratoria es ir modificando leyes de carácter general redactando artículos específicos para los ciudadanos de origen inmigrado. Así se modificó el Código Penal, la Ley de Bases Locales que regula el padrón entre otras. También se han puesto en marcha circulares internas y ordenanzas que aumentan la discriminación.

Algunos ejemplos que afectan directamente a la mujer inmigrante son:

3.4. Circular de la Policía Nacional para la violencia doméstica.

La ley protege a todas las víctimas de violencia de género sin distinciones. La Secretaria por la Seguridad dependiente de la Policía Nacional hizo una circular instando a este cuerpo de seguridad a abrir expediente de expulsión a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien una agresión. A partir de aquí será el juez el que cierre el expediente al dictar sentencia.

Hasta ahora más allá de la ley que avanza en la lucha contra este tipo de violencia, este aspecto quedaba regulado por el Reglamento de Extranjería (art. 96) que permitía a aquella víctima inmigrante en situación irregular, obtener un permiso de residencia temporal una vez dictada sentencia judicial y una orden de protección. Además se explicaba (porque así ha sido siempre en casos de racismo y explotación laboral) que la vía judicial para denunciar esta situación no tenía nada que ver con la situación administrativa de la víctima. Esta circular categoriza a las víctimas: las hay de primera y de segunda; y provocará que por miedo a la expulsión muchas mujeres no denuncien a sus maltratadores.

3.5. Políticas locales

Ordenanza Municipal sobre Civismo y Convivencia de Barcelona

La actual ordenanza sanciona la prostitución, mendicidad y venta ambulante en la ciudad. Todos estos temas que nada tienen que ver con el civismo, se intentan abordar a partir de una normativa sancionadora que estigmatiza a los colectivos más vulnerables y intenta englobar en un manipulado “concepto del civismo” situaciones de exclusión social y pobreza. Se trata de una ordenanza que repercutirá sobre los colectivos más desfavorecidos de la ciudad: muchas son las mujeres inmigrantes que participan en estas actividades.

La realidad ya ha puesto de manifiesto como ya han denunciado varias plataformas y asociaciones que centran su actividad en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, que son muchas las mujeres inmigrantes, fundamentalmente aquellas en situación irregular, las víctimas no solo de la norma sancionadora sino del acoso, cuando no maltrato, policial.

Los planes sociales desarrollados por el gobierno municipal para acompañar la ordenanza vuelven a dejar de lado a una parte importante del colectivo de mujeres inmigrantes, así el plan del trabajo sexual no contempla ninguna medida para aquellas trabajadoras sexuales en situación irregular cuando se sabe que representan una alta proporción.

Ordenanza reguladora de ayudas sociales de Vic

El gobierno municipal de este municipio aprobó este año una ordenanza que condiciona la adjudicación de las ayudas sociales gestionadas a nivel municipal (becas escolares, becas de comedor etc) a la asistencia obligatoria a un curso sobre derechos y deberes, fiestas tradicionales y civismo. Este planteamiento vuelve a estigmatizar a los colectivos más vulnerables, recortando sus derechos como ciudadanos y señalándolos como responsables de la falta de convivencia y civismo. La realidad es que parte de las personas susceptibles de recibir este tipo de ayudas son las personas inmigrantes y además las que suelen tramitar y realizar las gestiones son las madres de familia.

4. Racismo social

El racismo de la vida cotidiana, del ciudadano de a pie, también tiene sus matices cuando nos referimos a la mujer inmigrante. A los tópicos y prejuicios generales referentes a la inmigración hay que sumar aquellos específicos hacia la mujer inmigrante. Se visualiza como colectivo poco preparado profesionalmente, sin estudios, y naturalmente a “remolque” del hombre cuando no subordinada a éste.

Sin embargo, la realidad refleja que son muchas las mujeres con nivel de estudios altos y especializados aunque la sociedad de acogida las relegue a ser mano de obra barata. Así mismo, en muchos casos, la iniciativa y determinación a llevar a cabo su propio proceso migratorio las ha llevado a ser pioneras en la lucha por la emancipación en sus países de origen.

El énfasis que desde algunos sectores sociales y políticos se hace sobre la falta de igualdad en las relaciones hombre –mujer dentro de la inmigración, no deja de fomentar una visión etnocéntrica. Este análisis no responde a la realidad puesto que el colectivo de mujeres inmigradas es como hemos dicho heterogéneo. Además obvia intencionadamente que en nuestra sociedad muchas de las cuestiones criticadas eran aceptadas socialmente hasta hace poco tiempo y que otras todavía persisten en determinados sectores de la población. La universalización de la igualdad de derechos y oportunidades, la lucha por la no discriminación por cuestión de género se consigue fomentando el acceso a las políticas y leyes a todos y todas y fomentando la

participación real en las políticas contra la discriminación de las mujeres sea cual sea su origen nacional y no estigmatizando ni fomentando prejuicios.

La visión y el mensaje de los medios de comunicación no ayuda en este sentido sino que fomenta esta imagen peyorativa y negativa de la mujer inmigrante. Una parte de los medios de comunicación sólo se hacen eco de noticias negativas del hecho migratorio en general y más cuando se trata de la feminización de la migración. Así casi nunca salen en los medios el nivel académico universitario de muchas mujeres inmigrantes, su nivel de participación en asociaciones del barrio y/o en asociaciones de inmigrantes, su apoyo al trabajo de las escuelas donde asisten sus hijos, y su aportación a la integración de las familias en la sociedad de acogida. En cambio, el vínculo con la prostitución, con prácticas contrarias a los derechos humanos como la ablación de clítoris o la estigmatización de la mujer musulmana son temas recurrentes que se difunden sin el análisis que merecen, cuando no desde una óptica alarmista y demagógica. Como ejemplos se puede citar las noticias referentes a la inmigración femenina en el Raval. Ocupan titulares las referidas a la trata de blancas y la supuesta competencia entre las diferentes nacionalidades. Sin embargo, no es noticia cómo las trabajadoras sexuales sean del origen nacional que sean, se organizan y defienden conjuntamente sus derechos frente a la ordenanza municipal del civismo de Barcelona. Sí aparece como titular el grado de analfabetismo de las mujeres inmigrantes del Raval pero no en cambio, el hecho que las mujeres del barrio, inmigrantes y autóctonas, se unen para analizar los problemas de la zona y exponérselos al Síndic de Greuges en su visita al Casal dels Infants del Raval.

Los tópicos se deben contrarrestar dando información y aplicando desde los discursos políticos, escuela y medios de comunicación mucha pedagogía social que contraresta la visión negativa actual. Estas reflexiones deben ir acompañadas del análisis sobre la poca presencia de la mujer en general en medios de comunicación y libros de historia en nuestra sociedad.

Muchas son las mujeres inmigradas al cargo de las tareas familiares mientras son los maridos o compañeros los que tienen un trabajo remunerado. Ésto provoca por un lado que sean un motor de integración de la familia en el barrio, en la escuela y en general en la vida de la comunidad pero también que sean víctimas de las actitudes racistas en la vida cotidiana. Desde la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racisme podemos constatar como en los bloques de discriminación referidos a las manifestaciones del racismo social: acceso a los servicios, agresiones de particulares y conflictos vecinales las denuncias de mujeres ocupan más del 45% de los casos denunciados.

5. Integración de la mujer inmigrante. Políticas de ciudadanía

En el ámbito de Catalunya se ha elaborado el *Pla per a la Ciutadania* por la Secretaria de Inmigración. Este plan contempla varios programas dedicados a fomentar la incorporación de la mujer inmigrante en la sociedad. La diversidad de la población catalana femenina, por su parte, queda recogida en el *Pla d'Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones a Catalunya*. Sin embargo, además del planteamiento

6. MUJER E INMIGRACIÓN

político hará falta dotar de recursos económicos estas políticas y evitar que queden aisladas en estos planes sino que se apliquen desde una perspectiva transversal como acción de gobierno.

Pero todo esto no tendrá resultados si la política migratoria no auesta por un concepto de ciudadanía vinculado a la residencia y no a la nacionalidad, este aspecto es fundamental si queremos construir un futuro como sociedad basado en la justicia y la cohesión social.

La integración de las mujeres inmigrantes como ciudadanas de pleno derecho pasa por tanto por este nuevo concepto de ciudadanía que engloba igualdad de derechos fundamentales, sociales, económicos y políticos y por una igualdad de oportunidades que permita a las niñas catalanas de familias inmigradas incorporarse a la sociedad en las mismas condiciones que el resto.

Paralelamente hay que garantizar un real acceso de la mujer inmigrante a todas las políticas de lucha contra la desigualdad de oportunidades por cuestión de género que como sociedad vayamos instaurando.

Queda mucho por recorrer en este camino y las mujeres inmigradas deben incorporarse como sujetos activos siendo partícipes de estos cambios sociales. Esta participación de la mujer inmigrada no debe vincularse exclusivamente al hecho migratorio sino a todo aquello que como mujer y ciudadana le afecta. Muchas, a pesar de las trabas legales y sociales, ya lo están haciendo.